SENADO

I LEGISLATURA

Serie II:
PROYECTOS Y PROPOSICIONES
DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

19 de mayo de 1980

Núm. 85 (c)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 48)

PROYECTO DE LEY

Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares.

INFORME DE LA PONENCIA

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Educación y Cultura para estudiar el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares.

Palacio del Senado, 14 de mayo de 1980. El Presidente del Senado, **Cecilio Valverde Mazuelas**.—El Secretario primero del Senado, **José Luis López Henares**.

A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA DEL SENADO

La Ponencia designada para informar acerca del proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el «Estatuto de Centros Escolares», compuesta por los Senadores Beviá Pastor, Delgado Ruiz, Fernández-Galiano, Fernández de la Reguera y doña Pilar Salarrullana, ha estudiado con todo detenimiento tanto el texto remitido, después de su aprobación, por el Congreso

de los Diputados, como las enmiendas presentadas en el Senado, después de lo cual se honra en elevar a la Comisión el siguiente

INFORME

Se examinaron en primer lugar y con carácter previo, las enmiendas formuladas con los números 1 y 12 (ambas del señor Sobrequés Callicó, del Grupo Parlamentario CD i S), la primera de las cuales lo era a la totalidad, proponiendo un nuevo texto de todos y cada uno de los artículos, mientras que la segunda, también de un modo total ofrecía una reordenación del articulado del proyecto. Asimismo y con igual carácter previo, fue examinada la enmienda número 2 (del Grupo Parlamentario Socialista), que lo era de veto, solicitando, con amparo en el artículo 90, 2 de la Constitución, la devolución al Congreso de los Diputados del proyecto de ley remitido. Por mayoría, con abstención en cuanto al número 1 del Grupo Socialista, se estimó que las tres debían rechazarse, sin perjuicio de la posibilidad que tenían los enmendantes de defenderlas en el seno de la Comisión.

Entróse seguidamente en el análisis de las enmiendas presentadas a los artículos y Disposiciones complementarias del proyecto, todas y cada una de las cuales se consideró que debían desestimarse en la forma y con las particularidades que seguidamente se indican, lo que implica la consiguiente aceptación íntegra del texto remitido por el Congreso de los Diputados, por cuanto que la Ponencia, de su parte, no considera oportuno ni conveniente introducir modificación alguna.

Al artículo 1.º no se formularon enmiendas, siendo aprobado por mayoría, con abstención del Grupo Socialista.

El artículo 2.º fue objeto de las enmiendas números 12 y 13 (ambas del señor Cercós, del Grupo Mixto), que propugnaba la modificación, respectivamente, de los dos apartados, 2 y 1, del precepto. Se propone su desestimación por mayoría, con abstención del Grupo Socialista. Al mismo artículo se presentó también la enmienda número 16 (de este Grupo Parlamentario), que proponía su completa sustitución con un nuevo texto. La propuesta es igualmente desestimatoria por mayoría.

Al artículo 3.º se formularon las enmiendas número 13 (señor Cercós, del Grupo Mixto), dirigida a la modificación de los apartados 1 y 2, que, por mayoría y con abstención del Grupo Socialista, se estimó debía rechazarse; número 17 (Grupo Socialista), que pretendía la sustitución del texto remitido por otro nuevo, también en relación con los indicados apartados 1 y 2, de la que, igualmente por mayoría, se hace propuesta desestimatoria.

El artículo 4.º no había sido objeto de enmiendas, proponiéndose el mantenimiento del texto original por criterio mayoritario.

Al artículo 5.º se presentaron las siguientes enmiendas: la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto), que pretendía una nueva redacción del apartado 1; la número 14 (del señor Pons Pons, del Grupo Mixto), que solicitaba un nuevo texto del precepto, suprimiendo los dos apartados de que consta; la número

18 (del Grupo Socialista), encaminada a conseguir una nueva redacción de todo el artículo que sustituyese a la existente. La desestimación de las tres se propone por mayoría, considerándose más conveniente el texto del proyecto remitido.

El artículo 6.º no fue objeto de enmiendas, proponiéndose por mayoría su mantenimiento en la forma en que figura.

Igualmente, por mayoría, se estimó debían rechazarse las enmiendas formuladas al artículo 7.º, que eran la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto), que propugnaba la modificación del apartado 1, y la número 19 (del Grupo Socialista), que solicitaba una adición al mismo apartado.

Al artículo 8.º se presentaron las siguientes enmiendas: la número 13 (señor Cercós, del Grupo Mixto), dirigida a una nueva redacción del apartado 1, que, por unanimidad, se consideró rechazable; la número 14 (del señor Pons Pons, del Grupo Mixto), que solicitaba la adición de un nuevo apartado que sería el 1 bis; y la número 20 (del Grupo Socialista) tendente a un texto distinto de dicho apartado 1, haciéndose, por mayoría, propuesta desestimatoria de estas dos últimas.

Los artículos 9.º, 10 y 11 no fueron objeto de enmienda, proponiéndose la aprobación del texto remitido, por mayoría, con abstención del Grupo Socialista.

Tampoco tuvo enmiendas el artículo 12, haciéndose igual propuesta, en este caso por unanimidad.

Al artículo 13 se presentó la enmienda número 21 (del Grupo Socialista) que interesaba la supresión del vocablo «previa» añadiéndose «in voce» la palabra «plenas»; por mayoría se consideró que debía rechazarse. Igualmente, rechazable, por mayoría, se reputaron las enmiendas formuladas al artículo 14 que eran las señaladas con el número 14 (señor Pons, del Grupo Mixto), que señalaba una nueva redacción, y la 22 (del Grupo Socialista), que pedía una adición final al precepto. También se consideraban desestimables, con el mismo criterio aunque ahora con abstención del Grupo Socialista, las

enmiendas presentadas al artículo 15, es decir, la número 13 (señor Cercós, del Grupo Mixto), solicitando una nueva redacción; la 14 (señor Pons, del Grupo Mixto) pidiendo que se suprima la expresión «y en su caso al ideario educativo propio del Centro»; la 23 (del Grupo Socialista) también formulada a este artículo se estimó rechazable por mayoría. Como asimismo lo fueron la número 13 en pro de una nueva redacción y la 24 (Grupo Socialista) que pedía se suprimiese la frase «en los términos establecidos en la presente ley» que se habían presentado al artículo 16; y la 25 (del Grupo Socialista) que proponía un nuevo texto del artículo 17.

El artículo 18 fue objeto de cuatro enmiendas: la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) que propugna una nueva redacción del apartado 1, cuya desestimación se propone por unanimidad; la número 14 (del señor Pons, del Grupo Mixto) que en su triple vertiente solicitaba una nueva redacción del apartado 2, la supresión en el mismo de la expresión «y cuando lo hubiere, al ideario del Centro» y una también supresión en el apartado 3, de la que se hace propuesta mayoritaria de desestimación; lo que también se hace de la número 26 (Grupo Socialista) que solicitaba una redacción distinta del artículo; y la número 27 (del mismo Grupo Parlamentario) que pedía la adición de un nuevo artículo que sería el 18 bis.

Al artículo 19 se formularon las enmiendas siguientes: la número 9 (señor Sobrequés, de CD i S) que quería sustituir el texto remitido por uno nuevo y la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) que solicitaba una nueva redacción del apartado 2; por mayoría y con abstención del Grupo Socialista se propone que ambas sean desestimadas. Con este mismo criterio mayoritario y la también abstención del Grupo Socialista se considera desestimable la enmienda número 11 (del señor Sobrequés, de CD i S) que pretendía sustituir el texto remitido del artículo 20 por otro que tendría dos apartados. Del

mismo modo se consideraron no estimables la enmienda número 28, presentada al artículo 21, del Grupo Socialista, que propone la supresión del término «la creación», y las números 3, 4 y 6 (todas del señor Sobrequés) que sugieren la creación de un nuevo artículo a continuación del 21 del proyecto, siendo de consignar que en el acuerdo de propuesta desestimatoria de la enmienda número 4 se abstenía el Grupo Socialista.

A los artículos 22 y 23 no se había formulado enmienda alguna, proponiéndose la aprobación del texto del proyecto por mayoría, con abstención en cuanto a la primera del Grupo Socialista.

Al artículo 24 se presentaron dos enmiendas, la número 7 del señor Sobrequés que pedía sustituir su texto por otro diferente en cuanto al apartado 1; y la número 29 (del Grupo Socialista) referida a los apartados 2 y 3, pretendiendo respectivamente la supresión de la expresión «el Vicedirector en su caso» y una nueva redacción del apartado 3; de las tres se hacen propuestas desestimatorias por mayoría.

Al artículo 25 se presentaron las enmiendas número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) que pedía una nueva redacción del apartado 1; número 14 (del señor Pons, del Grupo Mixto) solicitando la supresión en el mismo apartado de la frase «la autoridad del Director será, en todo caso, la propia de su cargo y la sustitución de otro nuevo, del texto de los apartados 2 y 3 c); y la número 30 (del Grupo Socialista) que pretendía una redacción total distinta de los tres primeros apartados del precepto. Por mayoría se consideró más conveniente el texto remitido por el Congreso, proponiéndose en su consecuencia, la desestimación de las tres indicadas enmiendas; el Grupo Socialista se abstuvo en la votación de las tres primeras.

También fueron tres las enmiendas formuladas al artículo 26: la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) en el sentido de solicitar un nuevo apartado que sería el 2 bis; la número 14 (del señor

Pons, del Grupo Mixto) que pretendía introducir en dicho apartado otro nuevo anterior al a); y la número 31 del Grupo Socialista que ofrecía una redacción completa y diferente del precepto. Por mayoría, con la abstención del Grupo Socialista respecto de las dos primeras, se estimó que las tres debían rechazarse.

Al artículo 27 se presentaron las enmiendas número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto), que quería agregar un nuevo párrafo; y 32 (del Grupo Socialista), que pretendía suprimir el apartado 2 b), considerándose, por mayoría, que ambas eran desestimables.

Una sola se formuló al artículo 28 que fue la número 33 (del Grupo Socialista) que solicitaba la supresión de los apartados 1 y 2, lo que por mayoría no se estimó aconsejable, por lo que la propuesta es igualmente desestimatoria. Situadas sistemáticamente a continuación de este artículo 28 del proyecto, se habían presentado las enmiendas 34 y 35 (ambas del Grupo Socialista) que trataban de introducir dos nuevos artículos que serían el 28 bis y el 28 ter, referente el primero a la creación de una Comisión de Convivencia, cuya composición y facultades se detallan; y relativo el segundo a la también creación de dos Comisiones pedagógicas (de Curso y de Grado) indicando igualmente las respectivas composición y funciones. Ninguna de las dos se consideró aceptable, con criterio mayoritario, proponiéndose, de la misma forma, su desestimación.

Asimismo y también por mayoría se estimaron rechazables las enmiendas formuladas al artículo 29 que fueron la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) que solicitaba intercalar después de la palabra «ciclos» la frase «Y el Departamento de orientación y tutorías»; y la número 36 (Grupo Socialista) que proponía la sustitución del texto remitido por otro nuevo.

El artículo 30 fue objeto de la enmienda número 37 (del Grupo Socialista) que trataba de modificar la duración de los órganos directivos de los centros escolares, pa-

reciendo más conveniente el criterio del proyecto cuyo mantenimiento se aprobó mayoritariamente.

Al artículo 31 no se presentaron enmiendas, estimándose por unanimidad que debía mantenerse el texto remitido. La enmienda número 6 del señor Sobrequés proponía añadir un nuevo artículo a continuación del 31, último del título II, en el que figurasen las funciones que debe comprender la función de los Centros docentes, lo que por mayoría y con abstención del Grupo Socialista no se consideró preciso, estimándose que debía rechazarse.

Una sola enmienda se formuló al artículo 32 que fue la número 38 (del Grupo Socialista) tendente a modificar el apartado 1 en el sentido de simplificar su redacción, reduciéndolo a la necesidad de que los centros privados se acomoden en lo esencial a lo que se establezca para los centros públicos; se estimó, por mayoría, la conveniencia de mantener el texto remitido, rechazándose la modificación propuesta.

No tuvo enmiendas el artículo 33 y, por unanimidad, se acordó proponer el mantenimiento de la redacción del proyecto.

Al artículo 34 se presentaron siete enmiendas señaladas con los siguientes números: número 8 (del señor Sobrequés) que ofrecía una redacción completa y diferente del precepto que, con criterio mayoritario, absteniéndose el Grupo Socialista, no parecía aconsejable, por lo que debe rechazarse; la número 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) referente al apartado 1 que también se consideró rechazable, en este caso por unanimidad. La número 14 (del señor Pons, del Grupo Mixto) que alternativamente proponía una nueva redacción del apartado 1 o una ratificación de los apartados 1, 2 y 3 d) y supresión del 4; que, por mayoría, y con abstención del Grupo Socialista, no se estimó aconsejable, por lo que debe ser desestimada. La número 39 (Grupo Socialista) que ofrecía la sustitución del texto remitido por otro nuevo, que mayoritariamente no parecía aceptable, por lo que debía rechazarse; la 40 (también del Gru-

po Socialista) solicitando la introducción de un nuevo artículo, que pasaría a ser el 34 bis, relativa a la participación de los profesores, personal no docente, padres de alumnos y alumnos en los Centros privados financiados por la Administración con fondos públicos, que con igual criterio mayoritario no se consideró conveniente debiendo desestimarse; la 44 (del Grupo Socialista) que solicitaba la modificación de los apartados 1, 2 y 3 d) con nueva redacción de éste, así como introducción de un nuevo apartado, que sería el 3 e), que asimismo, por mayoría no se reputó aceptable por lo que debe ser rechazada; y la 46 (del Grupo Senadores Vascos) que pretendía añadir al apartado 2 la referencia de que en la elaboración del reglamento de régimen interior deban intervenir las partes afectadas, según el propio apartado, lo que no parece aconsejable a los Ponentes que, por unanimidad, proponen su desestimación.

El artículo 35 fue objeto de la enmienda número 41 (del Grupo Socialista) referente a la sustitución del texto del apartado 2 por otro nuevo, estimándose por mayoría que era preferible el figurado en el proyecto, por lo que ésta debía rechazarse.

Al artículo 36 se presentaron las enmiendas señaladas con los siguientes números: 13 (del señor Cercós, del Grupo Mixto) que pretendía añadir al apartado m) la frase «al servicio de orientación»; 14 (del señor Pons, del Grupo Mixto) que trataba también de añadir a dicho apartado m) una referencia a las asociaciones de alumnos, y 42 (del Grupo Socialista) dirigida a modificar la redacción del apartado a), así como añadir una letra nueva que sería la d) bis y un nuevo apartado, que tendría el número 2, referente al asesoramiento de la percepción por los alumnos de las prestaciones relativas a orientación escolar, asistencia social y servicios de Psicología. Por mayoría, absteniéndose el Grupo Socialista, respecto de la primera, se consideró que no era conveniente la estimación de ninguna de ellas,

por parecer suficientemente preciso el texto del proyecto.

Los artículos 37, 38 y 39 no fueron objeto de enmiendas, siendo de parecer la Ponencia, con criterio mayoritario y abstención del Grupo Socialista, en cuanto a las dos primeras, que debe respetarse totalmente el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Asimismo, por mayoría, absteniéndose también el Grupo Socialista se consideró que debe rechazarse la enmienda número 5 del señor Sobrequés de CD i S que solicitaba la introducción de un nuevo artículo, al final del Título III del proyecto, relativo al mantenimiento con fondos públicos de «Centros docentes privados» por no considerarlo conveniente en la forma como se formula.

Terminado el examen del articulado del proyecto, la Ponencia pasó al estudio de las Disposiciones complementarias, que son, una adicional, dos finales y cuatro transitorias, informando respecto de ellas en el siguiente sentido:

A la Disposición adicional se presentaron las enmiendas figuradas con los siguientes números: 10 (del señor Sobrequés, de CD i S) que pretendía sustituir el texto del proyecto por otro nuevo, 43 (del Grupo Socialista) igualmente de sustitución y 45 (Grupo Senadores Vascos) que también solicitaba una redacción diferente; todas ellas en relación con las Comunidades Autónomas y con referencia legislativa especialmente a los artículos 149 y 150 de la Constitución. La Ponencia estimó, por mayoría, absteniéndose el Grupo Socialista, en cuanto a la última, que era más conveniente mantener la redacción del proyecto, proponiéndose la desestimación de las tres.

A las Disposiciones finales no se formularon enmiendas, estimándose, por unanimidad, respecto de la primera y por mayoría, con abstención del Grupo Socialista, por lo que se refiere a la segunda, que debe mantenerse el texto del proyecto.

Las tres primeras Disposiciones transitorias tampoco fueron objeto de enmiendas, considerándose igualmente, de modo ma-

yoritario, y con abstención del Grupo Socialista, que también aquí debía ser mantenido dicho texto. A la Disposición transitoria cuarta se presentó la enmienda número 15 (del señor Matutes, del Grupo Mixto) pretendiendo sustituir la palabra «impartan» por la de «imparten», entendiéndose por unanimidad la Ponencia que no era necesario, por lo que debe ser rechazada.

De acuerdo con cuanto antecede, y al modo como al principio se dijo, se propone a la Comisión el mantenimiento íntegro del texto del proyecto remitido por el Congreso de los Diputados, en la forma referida en el Anexo, que según se ha dicho fue así aprobado por la Ponencia que suscribe, unas veces por unanimidad y otras por mayoría, absteniéndose en los casos que asimismo se indican, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Senado, 14 de mayo de 1980.
José Vicente Beviá Pastor, Juan Francisco Delgado Ruiz, Antonio Fernández-Galiano Fernández, Roberto Fernández de la Reguera Lagunero y Pilar Salarrullana de Verda.

A N E X O

PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES

TITULO I

Artículo 1.º

El régimen jurídico de los centros correspondientes a los niveles de Preescolar, Educación General Básica y Enseñanzas Medias se regulará por lo establecido en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen.

Artículo 2.º

1. La educación en estos centros buscará el pleno desarrollo de la personalidad

mediante una formación humana integral y el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, así como la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

2. En la actividad ordinaria de los centros estará incluida la orientación educativa y profesional de los alumnos a lo largo de su permanencia en ellos y de manera especial al finalizar la escolaridad obligatoria y en los momentos de ejercitar sus opciones académicas.

Artículo 3.º

1. Todos los españoles tienen derecho a recibir una educación básica y profesional que permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en los niveles que las leyes establezcan sin que la obligatoriedad pueda afectar a los menores de seis años.

Se extenderá la gratuidad, en cuanto las posibilidades presupuestarias lo permitan, a la etapa preescolar.

2. Se reconoce asimismo el derecho de todos los españoles a una educación de nivel superior al de la obligatoria. El ejercicio de este derecho estará únicamente condicionado por la elección vocacional, las aptitudes específicas y el aprovechamiento personal, de forma coherente con las posibilidades y necesidades de la sociedad.

3. Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho a recibir la educación a que se refieren los apartados 1 y 2.

Artículo 4.º

Los centros docentes estarán dotados de los medios necesarios para conseguir de manera sistemática los fines y objetivos propios de cada nivel o modalidad.

Artículo 5.º

1. Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos o pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la enseñanza conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo efecto podrán escoger el centro docente que mejor se acomode a esas convicciones.

2. El Estado, mediante la correspondiente ley de financiación de la enseñanza obligatoria, garantizará la libertad fundamental de elección de centro educativo en los niveles de enseñanza que se establezcan como obligatorios y, consecuentemente, gratuitos.

Artículo 6.º

1. Existirá en el Ministerio de Educación un registro público en el que se inscribirán todos los centros escolares.

2. Todo centro docente tendrá una denominación específica y un número de registro que deberá utilizar en todas sus actividades. No podrán emplearse por parte de centros o de otras entidades identificaciones diferentes a las que figuran en el registro público.

Artículo 7.º

1. Toda persona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad española, tiene libertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a las leyes.

2. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de nacionalidad extranjera, se atenderán a lo que resulte de los acuerdos internacionales o, en su defecto, del principio de reciprocidad.

Artículo 8.º

1. Son centros públicos los que tienen por titular a entes públicos con plena competencia como Administración educativa y aquellos otros entes territoriales a los que aquéllos la transfieran.

2. Son centros privados los que tienen por titular a una institución, entidad o persona pública o privada no incluida en el apartado anterior.

3. Se entiende por titular la persona física o jurídica que como tal conste en el registro a que se refiere el artículo 6.º

Artículo 9.º

1. Los centros docentes, en atención a los niveles educativos que imparten, pueden ser:

- a) De Educación Preescolar.
- b) De Educación General Básica.
- c) De Bachillerato.
- d) De Formación Profesional.
- e) Cualesquiera otros que legalmente se establezcan.

2. Los centros con modalidades específicas se regirán por reglamentaciones especiales en las que se adaptará lo dispuesto en la presente ley a las características propias de los mismos.

Artículo 10

1. Los centros docentes españoles en el extranjero tendrán estructura y régimen individualizados para acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los convenios internacionales.

2. Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales y, en su defecto, en aplicación del principio de reciprocidad, los centros extranjeros en España se ajustarán a lo que reglamentariamente determine el estatuto de los antedichos centros.

Artículo 11

1. Los centros docentes a los que se refiere el artículo 9.º acomodarán su estructura y régimen de funcionamiento a las exigencias del nivel o modalidad de que se trate, de acuerdo con las disposiciones que desarrollen la presente ley.

2. Podrán crearse centros integrados en los que se impartan, total o parcialmente, enseñanzas de dos o más niveles o modalidades. Reglamentariamente se determinará su régimen jurídico.

Artículo 12

1. Todos los centros docentes reunirán los requisitos mínimos que reglamentariamente se establezcan para impartir en cada nivel o modalidad educativa las enseñanzas con garantía de calidad.

2. Los requisitos se referirán a titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas, número de unidades escolares, número mínimo y máximo de puestos escolares, instrumentación pedagógica y servicios complementarios adecuados a las necesidades del centro.

Artículo 13

Los centros que tengan previa autorización para impartir enseñanzas de los niveles obligatorios gozarán de plenas facultades académicas. También gozarán de ellas los centros públicos de niveles no obligatorios, cuya titularidad corresponda a entes públicos que tengan competencia plena en materia educativa general en el nivel correspondiente.

Los demás centros de niveles no obligatorios podrán ser clasificados en libres, habilitados u homologados, en función de sus características docentes. Los centros homologados gozarán de plenas facultades académicas.

Artículo 14

Los centros, sin discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, y dentro de los límites fijados por las leyes, tendrán autonomía para establecer materias optativas, adaptar los programas a las características del medio en que estén insertos, adoptar métodos de enseñanza y

organizar actividades culturales y extraescolares.

Artículo 15

Los profesores, dentro del respeto a la Constitución, a las leyes, al reglamento de régimen interior y, en su caso, al ideario educativo propio del centro, tienen garantizada la libertad de enseñanza. El ejercicio de tal libertad deberá orientarse a promover, dentro del cumplimiento de su específica función docente, una formación integral de los alumnos, adecuada a su edad, que contribuya a educar su conciencia moral y cívica, en forma respetuosa con la libertad y dignidad personales de los mismos.

Artículo 16

Los profesores, los padres, el personal no docente y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos establecidos por la presente ley.

Artículo 17

Se garantiza el derecho de reunión del personal del centro en los locales del mismo, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades docentes y, en su caso, de acuerdo con lo que disponga la legislación laboral.

Las reuniones deberán ser comunicadas al director con la antelación debida.

Artículo 18

1. En cada centro docente existirá una asociación de padres de alumnos de la que podrán formar parte todos los padres o tutores de los escolares matriculados en aquél a través de la que ejercerán su participación en los órganos colegiados del mismo. Reglamentariamente se determinará la forma de constatar la representa-

ción de la asociación en los órganos colegiados del centro.

2. Las asociaciones de padres de alumnos, respetando el reglamento de régimen interior y, cuando lo hubiese, el ideario del centro, asumirán las siguientes finalidades:

a) Defender los derechos de los padres en cuanto concierne a la educación de sus hijos.

b) Elegir sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados del centro.

c) Colaborar en la labor educativa de los centros docentes y de una manera especial en las actividades complementarias y extraescolares.

d) Orientar y estimular a los padres respecto a las obligaciones que les incumben en relación con la educación de sus hijos.

e) Elaborar, desarrollar o modificar, junto con el claustro de profesores el reglamento de régimen interior del centro.

3. La asociación podrá celebrar reuniones en los locales del centro cuando tengan por objeto sus fines propios y no perturben el desarrollo normal de las actividades docentes, con conocimiento previo, en todo caso, del director del centro.

4. Las asociaciones podrán promover las correspondientes federaciones a nivel local o de ámbito territorial más amplio, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente.

Artículo 19

La Administración tendrá las siguientes competencias en relación con los centros docentes:

a) La programación general con participación efectiva de todos los sectores afectados, conforme legalmente se establezca.

b) La ordenación general de las enseñanzas.

c) La determinación de los niveles mínimos de rendimiento.

d) La inspección, la evaluación, el control y el asesoramiento de los centros.

e) La expedición o reconocimiento de los títulos académicos y profesionales.

f) La creación y supresión de los centros de su titularidad mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Educación.

g) La autorización de funcionamiento, la clasificación académica y la revocación de autorización de los centros que no sean de su titularidad, mediante orden del Ministerio de Educación, y con audiencia, en todo caso, de las personas o entidades titulares de los centros.

h) La determinación con carácter general de los límites máximo y mínimo de alumnos por unidad, así como la fijación de la plantilla del profesorado y demás personal de los centros públicos.

i) Establecer los requisitos a que se refiere el artículo 12 y velar por su cumplimiento.

Artículo 20

Las Corporaciones Locales tendrán, en relación con los centros docentes, las competencias y obligaciones que las leyes les atribuyan.

Artículo 21

Reglamentariamente se regulará la creación, clasificación y funcionamiento de centros experimentales, los cuales habrán de titularse expresamente de esta forma, con la finalidad de que la investigación y experimentación educativa, tanto en lo que se refiere a nuevos planes de estudio, innovación didáctica y programación educativa, como a formación del profesorado, organización y administración del centro y, en general, a cualquier otro aspecto que contribuya a mejorar la calidad de la enseñanza, responda de un lado a las exigencias reales del sistema, y de otro sirva para poder aprovechar al máximo sus resultados en los centros de régimen general.

TITULO II

De los centros públicos

Artículo 22

Los centros públicos de Educación Preescolar, de Educación General Básica, de Bachillerato y de Formación Profesional se denominarán Centros Preescolares, Colegios, Institutos de Bachillerato e Institutos de Formación Profesional, respectivamente.

Artículo 23

Todas las actividades del centro estarán sometidas a los principios consagrados en la Constitución y respetarán las opciones filosóficas y religiosas inherentes al ejercicio por los padres de los alumnos del centro del derecho reconocido en el artículo 27, 3, de la Constitución. La administración docente velará, en todo caso, por su cumplimiento.

Artículo 24

1. Los órganos de gobierno de los centros públicos serán unipersonales y colegiados.

2. Son órganos unipersonales: el director, el secretario, el jefe de estudios, el vicedirector en su caso, y cuantos otros se determinen reglamentariamente, en función de las características, niveles y capacidad de los centros.

3. Son órganos colegiados: el Consejo de Dirección, el Claustro de Profesores, la Junta Económica y cuantos otros se determinen reglamentariamente, en función de las características, niveles y capacidad de los centros.

Artículo 25

1. La autoridad del director será en todo caso la propia de este cargo. El director será nombrado entre profesores numerarios de Educación General Básica, de

Bachillerato y de Formación Profesional, en los niveles de Educación Preescolar y Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional, respectivamente.

2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que la Administración seleccionará y nombrará al director, de acuerdo en todo caso con los principios de mérito, capacidad y publicidad. El acceso a la condición de director se insertará dentro de los derechos propios de la carrera docente.

3. Corresponde al director:

a) Ostentar oficialmente la representación del centro.

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.

c) Orientar y dirigir todas las actividades del centro de acuerdo con las disposiciones vigentes.

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

e) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro.

f) Ordenar los pagos.

g) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.

h) Proponer el nombramiento de los cargos directivos.

i) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de su competencia, adopten.

j) Cuantas otras competencias se le atribuyan reglamentariamente

4. Reglamentariamente se determinarán las competencias de los demás órganos unipersonales de gobierno.

Artículo 26

1. El Consejo de Dirección estará compuesto por los siguientes miembros:

A) En los centros de Educación Preescolar y de Educación General Básica:

a) El director del centro, que será su presidente.

b) El jefe de estudios.

c) Cuatro profesores elegidos por el claustro.

d) Cuatro representantes elegidos por la asociación de padres de alumnos.

e) Dos alumnos de la segunda etapa de Educación General Básica elegidos por los delegados de curso.

f) Un representante elegido por el personal no docente.

g) Un miembro de la corporación municipal en cuyo territorio esté ubicado el centro.

h) El secretario del centro con voz y sin voto.

B) En los centros de Bachillerato y de Formación Profesional:

a) El director del centro que será su presidente.

b) El jefe de estudios.

c) Cuatro profesores elegidos por el claustro.

d) Cuatro representantes elegidos por la asociación de padres de alumnos.

e) Dos alumnos elegidos por los delegados de curso.

f) Un representante elegido por el personal no docente.

g) El secretario del centro, con voz y sin voto.

2. Corresponde al Consejo de Dirección:

a) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro, elaborado por el claustro de profesores junto con la asociación de padres de alumnos.

b) Definir los principios y objetivos educativos generales a los que habrá de atenerse toda la actividad del centro.

c) Informar la programación general de las actividades educativas del centro.

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre admisión de alumnos en el centro.

e) Aprobar el plan de administración de los recursos presupuestarios del centro elaborado por la Junta Económica y previa audiencia del claustro, así como supervisar la gestión económica ordinaria de la Junta Económica a través de la información periódica que ésta deberá facilitar.

f) Resolver los problemas de disciplina que afectan a los alumnos, de conformidad con el artículo 39.

g) Planificar y programar las actividades culturales y extraescolares del centro.

h) Establecer relaciones de cooperación con otros centros docentes.

i) Elevar a los órganos de la Administración informe sobre la vida del centro y sus problemas, formulando, en su caso, las oportunas propuestas.

j) Asistir y asesorar al director en los asuntos de su competencia.

k) Cualesquiera otras que reglamentariamente le sean atribuidas.

Artículo 27

1. El claustro de profesores es el órgano de participación activa de éstos en el centro. Estará integrado por la totalidad de los profesores que presten servicios en el mismo. Su presidente es el director del centro.

2. Son competencias del claustro:

a) Programar las actividades educativas del centro.

b) Elaborar el reglamento de régimen interior del centro, junto con la asociación de padres de alumnos, de conformidad con las disposiciones vigentes.

c) Elegir sus representantes en los órganos colegiados del centro.

d) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.

e) Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos.

f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación pedagógica.

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas reglamentariamente

Artículo 28

1. La Junta Económica es el órgano de gestión económica del centro y estará integrada por:

— El director, que será su presidente.

— El secretario.

— Dos profesores, elegidos por el claustro.

— Tres representantes, elegidos por la asociación de padres de alumnos del centro.

2. En los centros de Patrimonio Municipal o que reciban aportación económica del Municipio formará parte de la Junta Económica un representante del Ayuntamiento.

3. Los centros dispondrán de autonomía para administrar sus recursos presupuestarios sin perjuicio de lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Artículo 29

De acuerdo con las características de cada nivel educativo, podrán existir unos consejos de profesores en cada curso, así como seminarios o departamentos didácticos por materias, áreas o ciclos en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 30

Los órganos colegiados se renovarán anualmente. Reglamentariamente se determinará el tiempo durante el cual tendrán validez los nombramientos para el desempeño de las funciones que corresponden a los órganos unipersonales de gobierno, así como las causas de cese y remoción anticipadas, tanto de éstos como de los representantes que integran los órganos colegiados.

Artículo 31

Los órganos colegiados deberán reunirse al menos una vez por trimestre y cuantas veces sean convocados por el director del centro, a iniciativa propia o a petición de un tercio de los componentes. Serán preceptivas una reunión a comienzos de curso y otra al final.

TITULO III

De los centros privados

Artículo 32

1. Todas las personas físicas o jurídicas podrán crear, gestionar y dirigir centros docentes que impartan las diversas enseñanzas que comprende el sistema educativo, acomodándose en lo esencial a lo que respecto a los centros públicos del correspondiente nivel, ciclo o modalidad se establece en la presente ley.

2. No podrán ser titulares de centros privados:

a) Las personas que presten servicios en la Administración Educativa estatal, regional o local.

b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos.

c) Las personas físicas o jurídicas expresamente privadas de este derecho por sanción administrativa o judicial firme.

d) Las personas jurídicas en las que desempeñen cargos rectores o sean titulares de capital superior al 20 por ciento personas incluidas en los apartados anteriores.

Artículo 33

La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados se someterán al principio de previa autorización, la cual se concederá siempre que reúnan las condiciones mínimas que se establezcan con carácter general de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, singularmente en cuanto a instalaciones, profesorado y sistemas de enseñanza. La autorización se revocará cuando los centros dejen de reunir esas condiciones.

Artículo 34

1. Se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Cons-

titución. Asimismo podrán contratar el personal del centro y ejercitar los derechos y deberes dimanantes de esas relaciones contractuales con el personal, asumir la gestión económica del centro y la responsabilidad del funcionamiento del mismo ante la Administración, padres de alumnos, profesorado y personal no docente.

2. Cada centro deberá elaborar su propio estatuto o reglamento de régimen interior en el que establecerá la intervención de los profesores, de los padres de los alumnos, del personal no docente y, en su caso, de los alumnos, en el control y gestión del centro a través de los correspondientes órganos de gobierno, dejando siempre a salvo lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El estatuto o reglamento de régimen interior de cada centro incluirá, en todo caso, los siguientes órganos de gobierno:

a) Director, con la titulación académica adecuada, y, en su caso, otros órganos unipersonales de gobierno.

b) Consejo del centro, como órgano supremo de participación, en el que estarán representados, junto con la titularidad y los órganos unipersonales de gobierno, los profesores, los padres de los alumnos, el personal no docente y, en su caso, los alumnos.

c) Claustro de profesores, integrado por la totalidad de los profesores del centro, con la función de participar en la acción educativa y evaluadora del mismo.

d) En los centros o niveles sostenidos con fondos estatales o de otras entidades públicas, una Junta Económica en la que estarán representados, además de la titularidad del centro, los profesores, los padres de los alumnos y, en su caso, los alumnos, con la misión de intervenir en el control y supervisar la gestión económica del centro.

4. Los padres y profesores en el Consejo del centro y en la Junta Económica tendrán el mismo número de representantes, y supondrán en conjunto, al menos, la mitad de sus miembros.

Artículo 35

1. Todo español tiene derecho a ser admitido en un centro escolar de cualquier nivel educativo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas reglamentariamente para el acceso al mismo y existan plazas disponibles. En ningún caso habrá discriminación en el ejercicio de este derecho por razones de lenguas, raza, creencia y situación económico-social.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos generales de las convocatorias públicas de las plazas vacantes en los centros con financiación pública, comprendidos en el artículo 9.º, 1, y el procedimiento de admisión en los mismos. Entre los criterios de admisión se deberán tener en cuenta los que se refieren a proximidad domiciliaria y a precedentes de escolarización de hermanos en el mismo centro.

Artículo 36

Los alumnos tendrán los siguientes derechos:

a) A que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa, de acuerdo con la Constitución.

b) A que el centro les facilite oportunidades y servicios educativos para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en condiciones de libertad y dignidad.

c) A ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia democrática.

d) A la participación activa en la vida escolar y en la organización del centro en la medida en que la evolución de las edades de los alumnos lo permita.

e) A la orientación educativa y profesional, atendiendo a los problemas personales de aprendizaje y de desarrollo de la responsabilidad, así como a la ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades laborales.

f) A ser respetados en su dignidad personal no sufriendo sanciones humillantes.

g) A recibir ayudas precisas que compensen posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, principalmente en los niveles de escolaridad obligatoria.

h) A la utilización de las instalaciones, mobiliario y material del centro, que habrán de adaptarse a sus necesidades físicas y psíquicas con las máximas garantías de seguridad e higiene.

i) A que las actividades escolares se acomoden a su nivel de maduración y que su promoción en el sistema educativo esté de acuerdo con su rendimiento valorado objetivamente.

j) A realizar actividades culturales, deportivas y de fomento del trabajo en equipo y de la actuación cooperativa.

k) Al seguro escolar integrado en el sistema de Seguridad Social, que les proteja ante el infortunio familiar, accidente o enfermedad.

l) A formular ante los profesores y la dirección del centro cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estimen oportunas.

ll) A la realización de los reconocimientos médicos necesarios, al control sanitario y a la atención médico-preventiva adecuada.

Artículo 37

Los deberes de los alumnos son:

a) Respetar la dignidad y función de los profesores y de cuantas otras personas trabajen en el centro, así como las normas generales de convivencia y las establecidas específicamente para cada centro.

b) Participar en la medida en que lo permitan las edades propias de cada nivel en la vida escolar y organización del centro.

c) Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes.

d) Realizar responsablemente las actividades escolares.

e) Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del centro.

f) Colaborar con sus compañeros en las actividades formativas y respetar su dignidad individual.

Artículo 38

La participación de los alumnos a nivel de grupo, de curso y de centro en los distintos niveles educativos se efectuará de conformidad a los principios establecidos en la presente ley, desarrollados reglamentariamente, y en los estatutos de los centros privados. En aquellos en que se impartan estudios nocturnos figurará en el reglamento de régimen interior la forma de participación de los alumnos en el Consejo de Dirección.

Artículo 39

1. Sin perjuicio de las normas reglamentarias de carácter general que, dentro del marco de los derechos y deberes recogidos en la presente ley, establezcan el régimen de disciplina de alumnos, se especificarán en el estatuto o reglamento de régimen interior de cada centro las faltas de disciplina de los alumnos y las correspondientes sanciones, así como los órganos o sujetos del centro competentes para imponerlas.

2. En cualquier caso, la imposición de las sanciones correspondientes a las faltas consideradas muy graves, quedará reservada al Consejo de Dirección o al Consejo del centro.

3. Sólo podrá acordarse la expulsión de un alumno cuando de su permanencia en el centro puedan racionalmente derivarse daños graves para sí o para sus compañeros. Cuando la expulsión recaiga sobre un alumno de nivel obligatorio, la Administración le asegurará la continuidad de la educación mediante el procedimiento más adecuado en cada caso.

Disposición adicional

1. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las competencias recono-

cidas a las Comunidades Autónomas por sus Estatutos de Autonomía, dentro del respeto a la Constitución y a las Leyes Orgánicas, entre las que se encuentra la presente, que desarrollen el artículo 27 de la Constitución.

2. En todo caso, y por su propia naturaleza, corresponde al Estado:

a) La ordenación general del sistema educativo.

b) La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.

c) La alta inspección y demás facultades que conforme al artículo 149, 1, 30º, de la Constitución le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.

3. Los artículos 21; 24, apartados 2 y 3; 25,3 y 4; 26; 27; 28, 1 y 2; 29; 30; 31; y 37 de esta ley, sin perjuicio de su carácter general podrán ser modificados o sustituidos por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus facultades y competencias determinadas por sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición final primera

Queda autorizado el Ministerio de Educación para dictar en la esfera de su competencia o proponer al Gobierno cuantas disposiciones sean precisas para la mejor aplicación de la presente ley.

Disposición final segunda

Quedan derogados:

a) Los artículos 2.º, 1; 5.º,5; 19; 54,1, 2 y 4; 55; 56,1 y 2; 57; 58; 59; 60; 62,1, 2, 4 y 5; 89, 2 y 4; 94,1 y 2; 95,2; 99,1; y 125 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.

b) En cuanto se opongan a la presente ley, los artículos 1.º; 2.º, 2; 4.º; 5.º, 1; 6.º, 2; 13; 54,1; 61,1; 94,3; 126; 127; 128; 129; 130 y 131 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa.

c) Cualquier otra disposición contraria a lo preceptuado en la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

El Gobierno acordará las medidas precisas para la constitución, durante el curso 1980/81 de los órganos colegiados de los centros públicos a los que se refiere el Título II de la presente ley.

En las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias y en tanto éstas no sean dictadas, será de aplicación en cada caso la normativa hasta ahora vigente.

Segunda

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, los centros privados deberán elaborar sus Estatutos o Reglamentos de régimen interior y depositarlos en la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Educación.

Tercera

Los funcionarios del Cuerpo de Directores Escolares, en situación a extinguir, conservarán los derechos que les corresponden como funcionarios de este Cuerpo de la Administración Civil del Estado.

Cuarta

El Ministerio de Educación regulará reglamentariamente el régimen administrativo de aplicación a los centros que impartan el Curso de Orientación Universitaria o enseñanzas que lo sustituyan.

Suscripciones y venta de ejemplares:
SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.
Paseo de Onésimo Redondo, 36
Teléfono 247-23-00, Madrid (8)
Depósito legal: M. 12.500 - 1961
Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID